

**La coca
y las economías
de exportación
en América Latina**

Hermes Tovar Pinzón

Roger Rumrill

Gerardo Lovón Zavala

Róger Cortez Hurtado

Bernard Lavalle

Charles Walker

Emilio Garzón Heredia.

SERIE: CURSOS DE VERANO

La coca y las economías de exportación en América Latina
primera edición, abril 1993

© Hermes Tovar Pinzón

© de la presente edición:

Universidad Hispanoamericana Santa María de la Rábida

ISBN: 84-8010-017-6

DL: GR-463-93

Imprime: Graficas Anel
Albolote (Granada)
España

Hecho en España

Coca, cocaína y política en América Latina

Bernard Lavalle

Universidad de Burdeos

Burdeos (Francia)

LAS RAZONES que desde unos veinte años a esta parte hacen que con frecuencia los asuntos y escándalos relacionados con el narcotráfico ocupen las primeras planas de los periódicos y la delantera de los demás medios de comunicación, son sin lugar a duda numerosas, complejas y, de toda forma, parecen tener implicaciones que van mucho más allá de la larga lucha que las sociedades industrializadas del norte están llevando contra la plaga social que representa el consumo a gran escala de los estupefacientes en el mundo actual.

Así, desde hace unos diez o doce años más o menos, si es comprensible que en los mass media se hable cada vez más del comercio por supuesto ilegal de la cocaína dado el incremento vertiginoso de la difusión de ésta en los años 80, no deja de ser curioso que, relativamente, todo lo relacionado con la heroína, probadamente de mucho mayor peligrosidad social, no suscite habitualmente tanto interés de parte del periodismo de los países consumidores de los derivados del opio.

Nuestro propósito no es analizar aquí las causas aparentes o profundas de tal actitud, si bien, dado el origen de momento única-

mente latinoamericano de este producto, se puede sospechar que quizás esto tenga que ver con cierta imagen estereotipada del subconsciente que suele tener en América del Norte y en Europa, tal vez más aún con el trasfondo en gran parte inconsciente de la relación en muchos aspectos contradictoria de los Estados Unidos con sus vecinos del Sur.

Coca y política: hit parade de una crónica escandalosa

No obstante, de manera objetiva, hay que reconocer que el aspecto sensacionalista del problema ha quedado obviamente reforzado por la casi constante aparición en los periódicos, la radio o la televisión de noticias según las cuales tal o cual político, tal o cual grupo latinoamericano estaban implicados, en este u otro país, en el narcotráfico vinculado con la cocaína o en el lavado de dólares muy posiblemente provenientes de éste.

Si mal no recordamos, este tipo de informaciones empezó a trascender en la prensa internacional a propósito de Bolivia en los años finales del decenio de los 70, esto es cuando la dictadura del general Banzer (1971-78) ya está declinando y el presidente Carter trataba de moralizar las relaciones internacionales, y en primer lugar latinoamericanas, con la vuelta a la democracia en aquellos países que la habían perdido en provecho de golpes militares alentados o por lo menos aceptados por la precedente administración de la Casa Blanca. Ya anteriormente y de manera muy oficial, en 1976 con motivo de un encuentro bilateral, Henry Kissinger, el entonces secretario de Estado del presidente Nixon, y el propio Banzer, se habían comprometido a luchar conjuntamente contra la fabricación y tráfico de sustancias peligrosas, esto es diplomáticamente hablando de la coca, cuya producción en sus asentamientos tradicionales de los valles orientales de los Andes bolivianos (los Yungas) y más tarde el Chapare, al este de Cochabamba, prácticamente había triplicado entre 1971 y 1977 haciendo medrar al mismo tiempo toda una mafia vinculada con su comercialización y cuyos centros neurálgicos estaban entonces situados en la oriental ciudad de Santa Cruz que conoció un espectacular boom económico.

Entre 1978 y 1980, en tres ocasiones las elecciones dieron mayoría a la oposición de izquierda, pero cada vez los militares, aferrados al poder que detentaban desde casi diez años, se opusieron al veredicto democrático de las urnas. Los vínculos de los narcotraficantes con la camarilla militar se hicieron más evidente con motivo del golpe del general García Meza en julio de 1980. Una serie convergente de informaciones, muchas de ellas sin duda hábilmente proporcionadas por el DEA estadounidense, denunciaron a algunos generales-ministros de los sucesivos gabinetes bolivianos de la época como participantes activos en el narcotráfico, cuyo capo parecía ser el entonces ministro del interior, Luis Arce Gómez.

Tanto por su origen golpista como por su dudosa y cada vez más visible benevolencia con los narcos, los gobiernos dictatoriales de García Meza, luego de sus efímeros epígonos Torrelio y Vildoso, no lograron el reconocimiento oficial de los Estados Unidos ni tampoco, y sobre todo, que se reiniciase la ayuda económica y militar a la que poco después se negó también la Comunidad Europea por los mismos motivos. Ya no había salida y, en octubre del 82, tanto la degradación de la situación interna como las presiones internacionales hicieron que Hernán Siles Zuazo pudiera en fin ocupar la presidencia de Bolivia a la que había sido elegido dos años antes...

En los datos posteriores, como bien es sabido, el sensacionalismo relacionado con la coca se trasladó de Bolivia a Colombia en la medida en que las organizaciones criminales de este país, aprovechando sus redes ya constituidas y su experiencia ya larga en materia económica-delictiva, asumieron el hecho del liderazgo del narcotráfico y lo organizaron a nivel continental. La ascensión social de las figuras más destacadas de los cárteles, sobre todo el de Medellín, su voluntad de asegurar y robustecer dentro del aparato estatal las protecciones que les eran necesarias así como de obviar quizás el ostracismo que, a pesar de su riqueza tan ostentosa como reciente, le manifestaba la buena sociedad nacional, todo esto no podía sino sugerirles el interés, tal vez la necesidad, de penetrar los medios políticos colombianos.

El primero en intentarlo fue el célebre Pablo Escobar, en este aspecto figura más visible y en alguna manera pionera de los narcos nacionales. Creó primero dentro de la misma Medellín el movimiento *Medellín Cívico* que en los comienzos tuvo algún impacto y pudo haber sido un trampolín. Pero Pablo Escobar optó en definitiva por

una organización de carácter nacional y aprovechando una escisión del Partido Liberal se afilió al *Nuevo Liberalismo* liderado por dos hombres que en adelante tendrían un papel relevante en el debate político colombiano antes de desaparecer de manera igualmente trágica: Luis Carlos Galán y Rodrigo Lara Bonilla.

Sin embargo, la presencia de Escobar en las filas del *Nuevo Liberalismo* fue de corta duración. Parece ser que Lara Bonilla enterado del origen sospechoso de los fondos manejados por Escobar decidió rápidamente deshacerse de él. Lo hizo además de una manera voluntariamente espectacular y hasta provocativa, dado que lo expulsó durante un mitin multitudinario celebrado por el partido en la propia Medellín cuando se iban a designar los candidatos a diputados del *Nuevo Liberalismo*.

En su feudo *paisa* la figura máxima del cártel de la capital antioqueña lo sintió como lo que era: una afrenta personal y un reto político... Sin que nunca se pudiera probar nada, no faltaron quienes designaron a Escobar como autor moral del asesinato callejero de Lara Bonilla en abril de 1984 por pistoleros motorizados, cuando éste, desde hacía unos nueve meses ministro de Justicia del presidente Betancur, había iniciado un ataque de gran envergadura contra la mafia del narcotráfico.

Más tarde, tomando un camino diferente del de Escobar y sin duda aleccionados por su fracaso, los narcogaderos de otra región colombiana de la que hablaremos en adelante, la de Boyacá, decidieron crear su propio partido, el Movimiento de Restauración Nacional; *Morena*, surgido en una coyuntura política difícil para ellos cuando ya el Estado había declarado la guerra al narcotráfico. No consiguió ningún éxito notable, pero su existencia le permitió participar en las campañas y comicios nacionales, saliendo elegido en marzo de 1990 uno de sus principales animadores, Ivan Roberto Duque.

A lo largo de los años 80, muchos fueron los casos más o menos sonados a propósito de los cuales las prensas nacionales o internacionales llegaron a demostrar cómo personalidades a menudo muy cercanas a políticos de alto vuelo están implicadas de una manera o de otra en el narcotráfico o en su consiguiente lavado de dólares. Sin entrar en detalles para no transformar estas páginas en crónica escandalosa, recordaremos tan sólo los ejemplos en su tiempo más famosos:

-El expresidente de la república de Panamá, Manuel Noriega, actualmente encarcelado en Estados Unidos a raíz de la intervención militar estadounidense que lo derrocó el 20 de diciembre de 1989 y a quien, entre otros delitos de menor cuantía, se está acusando de participación directa o de encubridor en la comercialización de grandes cantidades de cocaína. Su sucesor instalado por las tropas norteamericanas, el abogado Guillermo Endara, democráticamente elegido algún tiempo antes pero que no había podido acceder al poder por las maniobras de Noriega, se encontró rápidamente sin embargo en una situación difícil. Se rumoreó que había sido el hombre de confianza de un negociante panameño, Carlos Eleta, detenido en el estado de Georgia en abril de 1989 mientras estaba montando una red de introducción de cocaína en los EE.UU.. Se demostró también que el flamante presidente había sido secretario -y seguía siendo accionista- de un banco conocido en el lavado de los narcodólares. Se llegó a probar lo mismo de uno de los vicepresidentes de Endara, Guillermo Billy Ford y del propio portavoz del presidente, Rogelio Cruz...

-El asunto de la llamada *Villa Coca* en Lima en la que, en julio del 85, explotó un laboratorio de transformación de pasta básica en una lujosa mansión de un barrio residencial, la cual pertenecía a un tal Reynaldo Rodríguez López, hombre de negocios que estaba a la cabeza de un verdadero imperio económico y conocía de muy cerca los problemas de la lucha contra el narcotráfico ya que tenía una oficina personal en las propias dependencias de la policía antidroga que lo había mandado al extranjero para representarla en un congreso dedicado a hacer mas efectiva la lucha contra los estupefacientes... Entre los colaboradores más cercanos a Reynaldo Rodríguez López, estaba Luis López Vergara, exsecretario particular y hombre de confianza de Luis Percovich. Bajo el anterior presidente, Belaunde Terry, éste había desempeñado cargos de primera magnitud, presidente de la Cámara de Diputados, ministro de Pesquería, luego del Interior durante varios años y por fin Primer Ministro.

Se podría también aludir en Argentina al *Yomagate*, así denominado por el nombre de la propia cuñada y secretaria del presidente Menem supuestamente relacionada con una red de siroargentinos dedicados al lavado de dinero negro. En el vecino Paraguay, el general Andrés Rodríguez, excolaborador durante muchos años del dictador Stroessner al que derrocó antes de hacerse elegir presidente tres meses

después, se conocía hasta entonces en las oficinas del departamento de justicia de los EE.UU. bajo apodo significativo de «*el general cocaína*» razón por la cual sin duda no tardó en dar manifiestas pruebas de buena voluntad en la lucha del narcotráfico en su país.

En Brasil, una red de traficantes llegó a penetrar en el Congreso de Brasilia y a disfrutar para sus desplazamientos de salvoconductos oficiales otorgados por algunos parlamentarios poco precavidos o cómplices. En Venezuela, que en los últimos años se ha convertido en un gran centro de redistribución del polvo blanco, se ha hablado mucho de un diputado detenido con varios kilos de cocaína en el coche que conducía, de varios altos oficiales retirados o en activo cogidos con las manos en la masa, sin contar que durante la última campaña que terminó con la elección del socialdemócrata Carlos Andrés Pérez una conocida personalidad de izquierda, José Vicente Rangel, llegó a insinuar la posibilidad de que el narcotráfico hubiese llegado de manera solapada a financiar las campañas de los grandes partidos. Ante el escándalo suscitado por sus palabras pronunciadas en un gran programa televisivo, citó una lista de diez traficantes según él infiltrados en los medios políticos del país.

Hasta la virtuosa Cuba se vio involucrada en semejantes problemas. Hacía ya algunos años que los servicios antidroga norteamericanos iban insinuando que la Cuba socialista servía de placa giratoria entre Colombia, Panamá y los países consumidores. En un principio, tales acusaciones que, por otra parte, no habían sido puntualizadas, fueron rechazadas como malévolas e infundadas por las autoridades cubanas que las presentaron como un elemento más de las campañas destinadas a denigrar el régimen en el concierto internacional. Sin embargo, andando el tiempo y por motivos complejos todavía no muy esclarecidos en los que entran sin duda en juego consideraciones de política interna, en junio del 89, el propio Fidel Castro reconoció las responsabilidades, en éste como en otros tráficos de dos grupos que rodeaban altas personalidades, el general Ochoa, excomandante jefe de las tropas cubanas en Angola y en el Ministerio del Interior Tony La Guardia que utilizaba para esto las vías secretas del ministerio originalmente destinadas a combatir el embargo impuesto a Cuba por los Estados Unidos.

Al cabo de este panorama tan rápido como superficial y destinado tan sólo, como decíamos, a recordar los casos más sonados que en su

tiempo salieron en primera plana de la prensa sensacionalista, quisiéramos hacer dos observaciones a nuestro juicio necesarias para calibrar la situación del subcontinente frente a la cocaína.

Primero, los medios políticos de América Latina no son los únicos en haberse visto involucrados en este tipo de problema, lo cual dicho sea de paso, no los exculpa ni mucho menos, pero lleva a considerar la situación de manera más global, quitándole a América Latina un protagonismo sospechosamente realzado sobre todo por ciertos medios de comunicación de Estados Unidos como si se tratara de algo consubstancial, propio de los Estados latinos cuyas élites políticas serían tradicionalmente corrompidas y por lo tanto de poco fiar en la perspectiva cualquier colaboración en la lucha antidroga.

Dejemos aparte casos idénticos relativos a algunos países del continente de habla inglesa (detención del primer ministro de las Islas Turks and Caicos; sospechas al parecer fundadas por algunos bancos de las Bahamas especializados en el lavado de narcodólares y acusaciones de la cadena norteamericana NBC contra el primer ministro del archipiélago), francesa (caso de los gobiernos haitianos de los generales Namphy y Avril que sucedieron a Baby Doc) u holandesa (insinuaciones contra Desi Bouterse el hombre fuerte de Surinam).

Pero es de reconocer que semejantes vínculos entre narcotráfico y política no se tratan en los mass media internacionales con tanto sensacionalismo ni sobre todo de manera tan sistemática, que los servicios oficiales empeñados en la lucha antidroga de EE.UU. o Europa no dejan de trascender informaciones con la misma facilidad calculada cuando se trata, por ejemplo, del evidente trasfondo de la producción del opio y sus derivados en muchas zonas asiáticas (Birmania, Tailandia, Turquía, Líbano, Pakistán, Irán o Afganistán) que, todos, como sobradamente se sabe, desempeñan papeles esenciales en el complicado tablero de la política mundial y por lo tanto se consideran como zonas sumamente sensibles.

Creemos también de interés subrayar otro aspecto. Por muy curioso y paradójico que pueda parecer a primera vista, en estos años finales del siglo XX el narcotráfico generado por la coca en América Latina no deja, por muchos conceptos, de recordar el tipo de relaciones que durante el siglo pasado se establecieron entre el mundo entonces desarrollado y las nuevas repúblicas nacidas del proceso de Independencia.

En la época, la nuestra, en que los precios de muchos productos tradicionales de exportación -fuera de los hidrocarburos- se han hundido vertiginosamente o paulatinamente por diversos motivos, la coca sigue siendo, al fin y al cabo uno de los pocos productos latinoamericanos altamente cotizados aunque con altibajos notables que en algunos momentos suscitaron verdaderas crisis. Si bien su comercialización es fundamentalmente ilegal y por lo tanto delictiva, este negocio, como durante el siglo pasado con el caucho amazónico, el guano peruano, el cacao ecuatoriano, el cobre y el salitre de Chile, etc., redunda casi únicamente en el fondo en beneficio de estructuras al fin y al cabo comerciales situadas en el lejano mundo desarrollado. Como bien se sabe la parte de la ganancia generada por la coca que se queda en los países productores es ridícula (no llega a un diez por ciento) comparada con las plusvalías realizadas en las regiones consumidoras.

Este no es el único aspecto, a propósito de la coca, de una especie de resurgimiento de una relación neocolonial entre América Latina y el Norte industrializado. Como veremos, la reactivación en éste de viejos prejuicios de tipo moral, seudomorales o sencillas coartadas al respecto, también se sitúan en la misma línea.

Por lo tanto, no es de extrañar que las élites políticas en condiciones que distan mucho de ser del todo diferentes *mutatis mutandis* -inextrincables dificultades económicas, angustias y prisas nacidas por la demanda posiblemente cíclica y por lo tanto pasajera del producto, debilitamiento del Estado, reforzamiento de la dependencia periférica relativamente a las potencias centrales- traten de aprovecharse del maná dejado por la coca y no tarden en abrigarlo confiándolo a bancos extranjeros o, de toda forma, en moneda extranjera, burlando las legislaciones nacionales, utilizando para esto vías delictivas. Al fin y al cabo, sus predecesores del siglo pasado no se portaron de otra forma cuando, a cambio de una ración a veces ridícula de la torta, entregaron las riquezas nacionales de turno a los financieros extranjeros y dejaron despojar a sus respectivas patrias de la mayor parte de los beneficios que razonablemente se podían esperar de los rubros de exportación.

La coca y las armas: la guerrilla frente al narcotráfico

Según una frase famosa, la guerra no es sino la continuación de la política sólo que con otros medios. Esta fórmula es más verdadera aún, si cabe, para las guerrillas. Ahora bien, el camino de la coca y de los movimientos guerrilleros de los años 80 vinieron en algunos casos a cruzarse o coincidir. En efecto, se da la casualidad de que la coca exige para su crecimiento unas condiciones ambientales muy peculiares, precisamente aquellas que se encuentran en zonas alejadas y hasta entonces marginales al este de los Andes, donde el Estado, tradicionalmente poco presente, por su misma ausencia, o deficiencias, permitía a los movimientos insurreccionales una libertad de maniobra bastante mayor y en algunos casos inclusive una impunidad de hecho.

El país donde por primera vez se dio esta conjunción fue Colombia, con el boom de la coca en la zona amazónica de la geografía nacional (sobre todo Meta, Caquetá, Guaviare, Vaupés y Llanos) regiones en las que, esencialmente en las tres primeras, existía desde hacía decenios unas guerrillas heredadas de la época conocida como la de la Violencia que había desatado a partir de finales de los años 40. De los cuatro movimientos existentes en Colombia (M19, ELN, EPL y FARC) este último era el único fuertemente radicado en las nuevas tierras de la coca.

Rápidamente las FARC se encontraron ante un dilema. De haberse opuesto al cultivo de la coca, se habrían cortado de las masas campesinas entre las que, de mucho tiempo atrás, habían venido desarrollando un buen trabajo ideológico. Por otra parte, entre un campesinado muy pobre les resultaba muy difícil, por no decir imposible, oponerse a las perspectivas de ganancias inesperadas y sin común medida con las que dejaban hasta entonces los pocos productos tradicionales esencialmente vueltos hacia el autoconsumo y, por lo tanto, prácticamente sin proyección monetaria.

Este nuevo boom manejado por los traficantes trajo consigo en la región toda una serie de trastornos sociales y, después de difíciles negociaciones, las FARC llegaron a imponer una especie de *modus vivendi* destinado si no a moralizar la producción de coca, por lo menos a asegurar al pequeño productor y al recolector cierta protección que no le dejara desvalido en manos de los narcotraficantes como

antes en las de los terratenientes. Primero, las FARC consiguieron que disminuyera notablemente la estela delictiva que tradicionalmente acompaña a los narcos (ladrones, prostitución, sicarios) y que, por supuesto, no había tardado en instalarse y proliferar en el oriente colombiano. Prohibieron igualmente el consumo de cocaína a los campesinos y que éstos fueran pagados parcialmente en droga -según la vieja tradición latifundista que abonaba cierto porcentaje del sueldo en alcohol- Para contrarrestar o por lo menos moderar los efectos del boom, el movimiento guerrillero impuso también al campesinado que no dedicara a la coca más que la tercera parte de las tierras cultivadas. En fin, las FARC cobraron un impuesto al productor, un diez por ciento de las ventas, mientras exigían el doble de los traficantes.

Esta situación de relativo equilibrio que, en fin de cuentas, contribuyó conjuntamente al robustecimiento de la guerrilla y al despegue económico de la zona duró mientras los precios de la hoja de coca y de la pasta básica se mantuvieron a cierto nivel. A partir de 1983, se empezó a manifestar un fenómeno de baja que se transformó casi en hundimiento a partir de 1989 cuando el Estado colombiano declaró la guerra al cártel de Medellín.

Ya desde 1986 sin embargo, el acuerdo tácito entre narcos y FARC había comenzado a resquebrajarse. Se rompió al final tanto por razones económicas como por las nuevas condiciones políticas que entonces se dieron en el país, esto es cuando la Unión Patriótica, muy próxima a las FARC y al Partido Comunista participó con notable éxito en la campaña municipal de 1986 desbancando en algunos casos a los partidos tradicionales. Se desató entonces una nueva oleada de violencia en la que las FARC, por sus vínculos con la Unión Patriótica se encontró sola ante el frente unido de sus adversarios, el ejército, los partidos tradicionales y, por supuesto, los narcos fundamentalmente opuestos al marxismo pero que hasta entonces habían tenido que negociar con la guerrilla y querían aprovecharse de la nueva coyuntura para deshacerse de su presencia molesta para sus intereses.

Otra región colombiana en la que tuvieron que coexistir guerrillas y narcos fue la del Magdalena Medio, región de pequeños colonos y grandes latifundios donde tradicionalmente se movía el Ejército de Liberación Nacional, ELN, de tendencia castroguerrillista, hasta que a comienzos de los años 70 las fuerzas armadas nacionales consiguiesen acabar prácticamente con él.

Cuando desapareció, las FARC vinieron a sustituirlo. El ELN se había mostrado siempre opuesto al cultivo de la coca. Al igual de lo que pasaba en el Meta, el Caquetá o el Guaviare, las cosas cambiaron, y las FARC garantizaron el cultivo de la coca y luego la expedición de la pasta básica a cambio de un acuerdo que recordaba mucho lo anteriormente indicado en el caso oriental.

En 1980, la decisión de las FARC de aumentar el impuesto cobrado a los narcos y de intensificar la lucha contra los latifundistas ganaderos modificó el panorama. El ejército nacional entró en el juego mientras que los ganaderos organizaron una milicia de autodefensa financiada en parte por grandes figuras del narcotráfico, como Rodríguez Gacha y la familia Ochoa, que habían comprado extensas tierras en la región. Como en el caso del Oriente todo redundó en una aceleración y radicalización del proceso de la violencia, en su politización también ya que, incluso, como hemos dicho anteriormente, los narcoganaderos de Boyacá llegaron a organizarse en un verdadero partido político, el *Morena*.

Indudablemente, tanto en ésta como en otras regiones, frente al difícilísimo problema del narcotráfico las FARC jugaron de manera ambigua. Políticamente, quisieron por una parte defender los intereses del pequeño campesinado, pero en lo económico no dejaron de sacar provecho de la nueva situación. Cuando el equilibrio de las fuerzas les vino a ser adverso, todas sus adversarios no tardaron en unirse en su contra desatándose una represión que dejó a la guerrilla bastante malparada pero que también afectó muy cruelmente, y quizás prioritariamente, al proletariado rural que las FARC pretendían defender.

El Perú ofrece otro caso significativo de la coexistencia problemática de un movimiento guerrillero por una parte, del cultivo de la coca y del narcotráfico por otra.

En un principio nacido en la zona andina de Ayacucho, cuando decidió pasar a la clandestinidad a comienzos de los años 80, el *Sendero Luminoso* no tardó en dirigirse hacia los valles calientes orientales que bajan hacia la cuenca amazónica. Diversas razones lo explican: las facilidades de comunicación que para esto le ofrecía la orografía, la posibilidad de acogerse a una región mucho menos controlada y controlable por el aparato estatal, la presencia allí desde

hacía varios decenios de un frente pionero susceptible de ser un terreno favorable para el trabajo político y social.

Ahora bien, en esa región, en particular en algunos sectores de la cuenca del río Huallaga, desde unos diez años, más o menos, el cultivo de la coca incentivado por las mafias colombianas se había desarrollado enormemente, pasando las áreas dedicadas a esta planta de 1.500 hectáreas en 1972 a más de 20.000 en 1979.

La guerrilla no tardó en entrar en el juego complejo y peligroso de la zona. Primero intervino en la creación de comités de defensa de los pequeños campesinos productores, luego participó en la lucha contra la erradicación de los cocales que intentaba propiciar el gobierno. Un poco a la manera de las FARC colombianas, *Sendero* quiso moralizar la vida en el Huallaga protegiendo a los campesinos de las exigencias de los traficantes así como de las depredaciones del hampa que tradicionalmente acompaña al narcotráfico e imponiendo que la coca no ocupase más de la tercera parte de los cultivos.

La coyuntura empezó a cambiar en la segunda mitad de los años 80 cuando, empujado por las presiones internacionales, el gobierno peruano del nuevo presidente Alan García elegido en 1985, inició una serie de operativos de gran envergadura con resultados a veces espectaculares y de todos modos ampliamente repercutidos por los medios de comunicación.

Sendero Luminoso otorgó su protección al narcotráfico a cambio de un impuesto, elevado, a los traficantes y de la garantía para los pequeños productores de un precio mínimo. Según las estimaciones, *Sendero* pudo recoger así varios millones de dólares al año destinados a desarrollar sus acciones políticas y, evidentemente, su capacidad militar que por aquellos años empezó a extenderse mucho más allá de su región de origen, el Centro Sur andino...

En 1988, del 20 al 23 de agosto, la guerrilla probó su capacidad de intervención en la capital regional, Tingo María, y su comarca en cuanto a los problemas de la coca se refería, cuando impuso una huelga general de tres días para protestar contra el proyecto norteamericano de fumigar con avionetas los cocales con herbicidas, nueva técnica heredada de la guerra de Vietnam y destinada a sustituir masivamente las campañas de destrucción de los plantíos que, desde hacía unos años, las fuerzas oficiales amparadas por funcionarios del DEA estadounidense estaban llevando a cabo y habían realizado en

más de diez mil hectáreas no sin que los campesinos alentados por *Sendero Luminoso* resistiesen de manera a veces muy violenta que se saldó con apreciable número de muertos entre las fuerzas represivas...

El recurso a este nuevo método de lucha altamente tecnificado - un herbicida, el Spike del que la propia casa productora EE.UU. no tardó en reconocer su altísima peligrosidad y que retiró poco después del mercado por los estragos irreversibles que causaba a la flora, la fauna y probablemente al hombre- significó una nueva etapa en la lucha que se estaba trabando en las orillas de los ríos amazónicos desde donde despegaban los hidroaviones colombianos ahora que los innumerables terrenos de aterrizaje de la mafia habían sido localizados gracias a los satélites espías.

Ante estos ataques de un nuevo estilo, el reforzamiento de la presencia de las fuerzas armadas en la zona y la presencia cada vez más visible y efectiva de consejeros norteamericanos en el terreno, *Sendero Luminoso* que, por su parte, había aumentado considerablemente su capacidad de intervención en material y en hombres pero también se había aprovechado de la represión indiscriminada de las fuerzas primero policiales luego del ejército, decidió pasar a una nueva etapa en la que su apoyo a los campesinos no era por supuesto más que una carta política.

Por una parte, lanzó él también operativos de envergadura y espectaculares -a veces con centenares de hombres fuertemente armados- contra diversas ciudades de la zona, llegando a ocupar varias de ellas durante algunas horas. Por otra, en diversas ocasiones atacó la base de Santa Lucía situada a unos diez kilómetros de Uchiza, verdadero centro neurálgico fuertemente equipado de las FF AA y del DEA contra la guerrilla del narcotráfico.

Si la coyuntura político-militar en la que se movía la guerrilla había evolucionado notablemente, lo mismo estaba pasando con la economía de la coca. La represión decidida en su país por el gobierno colombiano contra las mafias consiguió una notable desorganización del mercado y un rápido hundimiento de los precios. En pocos meses durante el año 90, estos se dividieron por diez en lo que a la materia prima, la hoja, se refiere y a un 40 por cuanto a la pasta básica.

Sendero intervino indirectamente en el asunto, negándose a que los productores cobrasen menos de cierta cantidad fijada por él -cuatro veces más de lo que proponían los narcotraficantes- lo cual condujo a enfrentamientos tanto con éstos que no pocos campesinos que ante la crisis tan repentina como para ellos de imprevisibles y casi trágicas consecuencias, desacatando las consignas terminantes de la guerrilla, estaban dispuestos a vender su producción a cualquier precio.

Las nuevas relaciones que, el presidente Alberto Fujimori, llegado al poder en julio del 90, quiso establecer -o restablecer después de las decisiones arriesgadas de su predecesor- con la comunidad internacional, y en primer lugar con EE.UU., para tratar de solucionar los enormes problemas económicos y sociales de un país que está atravesando por la crisis más grave de su larga y convulsionada historia, la extensión y la afirmación político-militar de la guerrilla, precisamente en la región amazónica como en muchas otras del ámbito nacional, eran elementos que no podían dejar de influir en el problema, y veremos más adelante como no tardaron en manifestarse.

La lucha antidroga: política U.S. y nacionalismo latinoamericano

De manera indudable, los últimos años han sido marcados en el subcontinente por una acelerada y marcada militarización de la lucha antidroga y por la creciente inversión en el terreno de las fuerzas armadas del gran vecino del norte. Inclusive, en junio del 90, el semanario *Newsweek* llegó a anunciar un plan de batalla general del ejército norteamericano contra el narcotráfico.

Los periodistas autores del artículo daban como supuesto cerebro del plan al general Maxwell Thurman, jefe del comando sur de las fuerzas US y anteriormente hombre clave de la intervención panameña contra Noriega que, como bien se sabe, se había decidido dados -según versión oficial- los vínculos de éste con el narcotráfico internacional. Dicho plan preveía una serie de operativos simultáneos en varios países. Si los efectivos en el terreno serían nacionales, la logística, los elementos de inteligencia y los medios serían de origen US.

Es muy posible que esta noticia trascendiera por motivos de política interna estadounidense, en particular para evitar posibles recortes en el presupuesto militar que entonces se estaba discutiendo. Dada la fuerza del lobby antidroga en Estados Unidos, era una manera de presionar indirectamente a representantes y senadores.

En realidad, desde hacía algunos años ya, la capacidad militar de EEUU estaba directamente implicada en la lucha antidroga. Ya hemos hablado de miembros del DEA presentes, por ejemplo en la selva peruana, pero se puede recordar también un caso mucho más visible, y en su tiempo muy comentado en la prensa internacional, como fue de julio a octubre de 1986 la participación de 160 *rangers* al lado de tropas nacionales en la oriental región del Beni boliviano.

De la misma manera los aviones espías AWACS estaban siendo regular y ampliamente utilizados para detectar los movimientos de los aviones dedicados al narcocontrabando. Para 1990, el ejército norteamericano había recibido 450 millones de dólares por concepto de su participación en la lucha antidroga, en 1991 dicha cantidad fue prácticamente triplicada.

Según sus adversarios resultado de la teoría de la guerra de baja intensidad y de un neo macarthismo solapado, esta marcada orientación de la defensa US no sería más que un avatar de la vieja política del *Big stick* y una mera coartada hacia la que se intentaría peligrosamente atraer también a las fuerzas armadas de los países productores.

Sea lo que fuere, en éstos la consecuencia más inmediata ha sido el resurgimiento de la sensibilidad anti yankee en no pocos sectores populares y de izquierda. Fue visible por ejemplo en Colombia cuando en enero del 90 el gobierno estadounidense intentó conseguir del presidente Barco la presencia permanente de una flota norteamericana a cien millas de las costas colombianas y la posibilidad para ésta de inspeccionar los buques colombianos posiblemente involucrados en el narcotráfico. Si al respecto el gobierno se mantuvo firme, poco después se supo que con iguales fines había sin embargo aceptado la instalación en Santander, Bucaramanga y Barranquilla, así como en la isla colombiana de San Andrés situada frente a las costas nicaragüenses, de una red de gigantescos radares cuya capacidad iba sin duda mucho más allá de su propósito oficial.

De la misma forma, la oposición muchas veces mal entendida en Europa de amplias capas sociales colombianas a la extradición de los narcotraficantes nacionales, tiene que analizarse como lo que es fundamentalmente, a saber una innovación quizás peligrosa en el derecho internacional según el cual tradicionalmente un estado no extradita nunca a un ciudadano suyo hacia otro país.

La cumbre que en Cartagena (Colombia) reunió el 15 de febrero de 1990 a los primeros mandatarios del país invitante (Virgilio Barco), EEUU (George Bush), Perú (Alan García) y Bolivia (Jaime Paz Zamora), esto es de las naciones más implicadas en la producción, comercialización y consumo de coca y cocaína, dio la impresión de poder marcar un hito importante en el problema que nos interesa.

Los presidentes se pusieron de acuerdo sobre dos principios, el primero de ellos aceptado oficialmente por primera vez por Estados Unidos: la *responsabilidad compartida* entre productores y consumidores.

En otras palabras había que acabar de «satanizar» únicamente a aquellos países que producían la coca, olvidando que allí ese tipo de actividad no existía sino porque había fuera de ellos una fuerte demanda con gran capacidad adquisitiva. Mientras los Estados del norte industrializado no tratasen de erradicar en su propio suelo este problema, cualquier tentativa por acabar con la coca en las vertientes orientales de los Andes estaba destinado a fracasar.

El segundo principio, llamada de *desarrollo alternativo*, correspondía también a una vieja exigencia de los países andinos, particularmente Bolivia, para cuyo presidente era obvio que contentarse con arrancar cicales sin pensar en todo un contexto sustitutivo en lo económico y lo social, era igualmente inoperante. Se perfilaba entonces la posibilidad de una especie de mini plan Marshall y en el fondo de una reconsideración global de la tan controvertida relación Norte-Sur.

No obstante, este encuentro que sólo se podía concretar, entre otras cosas de hacerse efectivas las enormes promesas financieras del presidente norteamericano, quedó en gran parte letra muerta dado el giro brusco que tomó la política US y mundial con la guerra del Golfo, sus exigencias económicas y el cambio de rumbo drástico que

significó en muchos aspectos de las urgencias y prioridades de los Estados Unidos.

Así en el caso peruano, aún antes del conflicto sólo se ofreció a Alan García equipar seis batallones de especialistas de la lucha antidroga entrenados por consejeros estadounidenses, oferta que rechazó el presidente aprista en la medida en que no iba acompañada de ninguna ayuda para la reconversión económica prometida, o vislumbrada, en Cartagena.

Después de la guerra del Golfo, en el ambiente de euforia militarista que se estableció en Washington, y por su parte acorralado por una inextricable situación económica que pese a toda se iba degradando cada vez más, el primero de marzo de 1991 el nuevo presidente Alberto Fujimori tuvo que aceptar las condiciones de Washington. A cambio de una ayuda de 100 millones de dólares, y a pesar de algunas medidas pantallas, este acuerdo otorgaba más poder de decisión a los Estados Unidos en la lucha antidroga del Perú y, sobre todo, daba un paso decisivo en una mayor implicación de las fuerzas armadas en la lucha que desde hace algunos años se está trabando en las lejanas tierras del Alto Huallaga, lo cual al fin y al cabo no podía sino acentuar la militarización ya inquietante de la vida nacional.

Si la coca y sus derivados han suscitado un boom que desde muchos aspectos recuerda los que conocieron diversos países latinoamericanos durante el siglo pasado, la gran novedad reside sin embargo en el hecho de que, esta vez, el producto considerado, por la magnitud y multiplicidad de sus implicancias en una zona ultra sensible se está convirtiendo, de maneras diferentes según los Estados, en uno de los ejes principales de la geopolítica del subcontinente y en alguna medida sirve de revelador exacerbado para las relaciones Norte-Sur y las nuevas orientaciones que los Estados Unidos están dibujando de cara al porvenir para esa región del mundo.

Bibliografía:

La obra esencial sobre el tema, y en la que nos hemos inspirado fundamentalmente, es el libro reciente de

ALAIN LABROUSSE. -*La drogue, l'argent et les armes*, París, Fayard, 1991

En lo que se refiere a las demás publicaciones francesas sobre la coca se puede citar también:

CAMACHO GUIZADO, ALVARO.- «*La drogue encore: de la marijuana a la cocaïne*» *Amérique Latine*, nº23, Julio-septiembre 1985

GENE, JEAN PIERRE.- «*Ochoa, les zones d'ombre d'un «procés limpide*», *Libération*, 5 de septiembre de 1990

GUGLIOTTA, GUY y LEEN, JEFF.- *Les rois de la cocaïne*, París, Presses de la Cité, 1989

HERTOGHE, ALAIN.- «*Répit pour les champs de coca péruviens*», *Libération*, 19 de julio 1988

LABROUSSE, ALAIN y DELPIROU, ALAIN.- *Coca Coke*, París, la Découverte, 1986

LABROUSSE, ALAIN y HERTOGHE, ALAIN.- *Le Sentier Lumineux du Pérou*, París, La Découverte, 1989

LA GRANGE, BERTRAN DE.- «*Cocaïne et politique dans un village mexicain*» *Le Monde*, 8 de abril 1990

PECAULT, DANIEL.- «*La Colombie dans la tempête*» *Problèmes d'Amérique Latine*, nº98, 4º trimestre 1990

VENTURINI, ERIC.- «*Coca jungle*», *Témoignage Chrétien*, nº extra Drogue, 4º trimestre 1989